



## JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ

### LOS JUECES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ

#### A LA OPINIÓN PÚBLICA

#### PRESENTAMOS EL SIGUIENTE COMUNICADO

Ante el contenido de las recientes declaraciones vertidas por el Alto Comisionado para la Paz, algunos abogados litigantes y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP.

Rechazamos las manifestaciones públicas que asignan responsabilidad a los funcionarios de esta especialidad en oposición al curso que debe seguir el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y las FARC-EP, de cara a la aplicación de la Ley 1820 de 2016, que dicta disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones.

Por virtud de lo anterior, manifestamos que:

1. Los jueces de la república estamos obligados a dar cumplimiento a la Constitución Política y la Ley, según disposición del artículo 230 Superior.

En ese contexto, hemos tramitado varias solicitudes de aplicación de la Ley 1820 de 2016, de la cuales, hasta el conocimiento alcanzado el día de hoy, en nuestra ciudad, han sido negadas todas ellas, con fundamento en los siguientes soportes:

- 1.1. Inexistencia de la Jurisdicción Especial de Paz y su secretario ejecutivo, autoridades a las que deben ser remitidas las actuaciones y suscritas las diligencias de compromiso para la libertad condicionada. (Artículos 18 y 36).

Vale la pena agregar, que en procura de la seguridad jurídica que se afirma en la Ley 1820, de acuerdo con el contenido del artículo 13, es la aludida Jurisdicción Especial de Paz, la llamada a revisar las decisiones que se adopten en el marco de la aplicación de las amnistías.

La competencia que asiste a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, atañe exclusivamente los delitos políticos del artículo 15 y los conexos, expresamente señalados en el artículo 16 de la referida norma, siendo muchas de las peticiones allegadas a nuestros



## JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ

despachos, atinentes a conductas delictivas distintas, cuyo estudio corresponde por virtud del artículo 21, a la Jurisdicción Especial de Paz.

- 1.2. No existe el texto definitivo de dejación de las armas, que trata explícitamente el artículo 18 de la mencionada Ley, sin importar la situación jurídica del aspirante a ser beneficiado con misma (privado o no de la libertad).
- 1.3. En el contexto del artículo 17 de la Ley 1820, son varias las alternativas para acceder a los beneficios de la amnistía, particularmente el numeral 2 del referido artículo, se exige la existencia de un listado definitivo entregado por las FARC-EP para el establecimiento de su pertenencia, militancia o colaboración con el referido grupo insurgente.

A pesar de no encontrar en el texto de la Ley 1820, tratamiento diferenciado, nos asalta enormemente la preocupación en torno a la posibilidad de error en que podemos incurrir, al otorgar los efectos de esta normativa a personas ajenas a las filas de las FARC-EP o que a pesar de su militancia, estén en oposición al proceso de paz firmado con el gobierno nacional (disidentes), situación que se decantaría eficientemente con las listas que se anuncian por vía de la referida ley y los pronunciamientos de los representantes de los extremos en conflicto.

2. En procura de superar las adversidades ocasionadas con las negativas decretadas por los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por conducto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el pasado viernes 27 de enero de 2017, un grupo de representantes de nuestra especialidad acudió a las dependencias de la Presidencia de la República en reunión con delegados de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la que se plantearon las falencias que advertimos en el contenido de la Ley 1820 de 2016, fijando unos compromisos de reglamentación que a la fecha no ha sido publicada por el ejecutivo.

Finalmente, expresamos nuestro descontento con las afirmaciones desobligantes que a través de los medios de comunicación, se han conocido, en las que se califica nuestra labor como indebida, negligente e inoperante, cuando nuestra posición ha sido uniforme en la aplicación de los principios constitucionales que gobiernan nuestra tarea y siempre hemos estado en posición académica de diálogo para poder cumplir satisfactoriamente el cometido que nos ha sido asignado.